

RECOMENDACIONES POLÍTICAS DEL PROYECTO " L' ESSENZIALE E ' INVISIBILE AGLI OCCHI - INV "

El nuevo modelo pedagógico, tal como ha sido diseñado y probado dentro del proyecto INV se basa en una nueva actitud de los profesionales y las profesionales que trabajan con personas con discapacidad intelectual (DI) con necesidades de apoyo extenso o generalizado. La prueba, realizada con éxito, ha demostrado la viabilidad del nuevo modelo, que se centra en una relación adulta y equitativa entre la persona de apoyo y la persona con discapacidad intelectual, así como en el empoderamiento de la persona con DI. El empoderamiento exitoso de las personas con DI y su desarrollo hacia una vida independiente y autónoma no sólo es un modelo a seguir por los y las profesionales y proveedores de servicios sociales, sino, al mismo tiempo, un mensaje hacia los/las *decision makers* y legisladores de que no resten poder a las personas con discapacidad intelectual y acepten y practiquen habitualmente esta nueva actitud

- practicando una educación y un apoyo social individuales y centrados en la persona;
- convirtiendo la tutela en *apoyo activo* en la toma de decisiones;
- garantizando la libertad de movimiento, la libertad en la toma de decisiones en relación a la vivienda y lugares de trabajo para las personas con DI;
- fomentando la participación de las personas con DI en las decisiones políticas a través de la no restricción del ejercicio de sus derechos políticos a votar;
- reconociendo su derecho a tener su propia pareja y familia;
- asegurando un "entorno mentalmente accesible", principalmente en oficinas gubernamentales y en servicios comunitarios y promoviéndolo en los servicios personales;
- abriendo un espacio para la participación de las personas con DI con necesidades de apoyo extenso y generalizado en la vida "normal".

Dicha nueva actitud debe ir de la mano del reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad con necesidades de apoyo extenso o generalizado. De acuerdo con el documento temático publicado por el Comisario del Consejo de Europa para los Derechos Humanos: *"El goce de capacidad jurídica nos permite elegir dónde y con quién queremos vivir, votar al partido político que preferimos, lograr que se respeten nuestras decisiones en materia de atención de salud, controlar nuestros asuntos financieros, y tener acceso a cines y a otras actividades de ocio. Sin ello, no somos personas ante la ley, y nuestras decisiones no tienen valor jurídico alguno. Ésta sigue siendo la realidad de cientos de miles, si no un millón, de europeos con discapacidad intelectual y psicosocial, que han sido colocados bajo regímenes de tutela"*¹.

¹ Estrasburgo 20 Febrero 2012 CommDH/IssuePaper(2012). "¿QUIÉN DEBE DECIDIR? Derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial"

Para poner en práctica los aspectos mencionados anteriormente, es necesario armonizar las legislaciones nacionales con la Convención de las Naciones Unidas (2006), principalmente respecto a los siguientes apartados:

Preámbulo

j) Reconociendo la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, *incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso*.

Artículo 12 – Igual reconocimiento como persona ante la ley

1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.
3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.
4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.

Artículo 19 – Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad

Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en especial que:

- a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico;
- b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta;
- c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades.

Artículo 22 – Respeto de la privacidad

1. Ninguna persona con discapacidad, independientemente de cuál sea su lugar de residencia o su modalidad de convivencia, será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación, o de agresiones ilícitas contra su honor y su reputación. Las personas con discapacidad tendrán derecho a ser protegidas por la ley frente a dichas injerencias o agresiones. (...)

Artículo 24 – Educación

(...) 3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad (...)